

Santiago, ocho de agosto de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 72024: téngase presente.

**Visto y teniendo presente:**

**Primero:** Que comparece el abogado don Juan Pablo Aguilar Brecas, en representación de doña Constanza Camila Aguilar Castillo, demandante en autos sobre despido injustificado y cobro de prestaciones, Rit O-1584-2024, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, quien deduce recurso de queja en contra de los integrantes de una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz, ministra suplente señora Paola Díaz Urtubia y fiscal judicial señora Ana María Hernández Medina, por haber dictado con faltas o abusos graves la resolución de 16 de mayo de 2024, por la cual confirmaron la de primer grado que declaró la caducidad de la acción de despido injustificado y de cobro las prestaciones que de ella derivan, específicamente en lo referido al recargo legal y a la devolución del aporte efectuado por el empleador a la cuenta individual de cesantía de la trabajadora.

Manifiesta que el juicio se inició por demanda de 5 de marzo de 2024, en que su representada solicitó declarar injustificado el despido comunicado el 31 de octubre de 2023, respecto del cual ingresó un reclamo ante la Dirección del Trabajo el 1 de diciembre de 2023, que citó a una audiencia de conciliación para el día 18 de ese mes y año; que la parte demandada se defendió oponiendo excepción de caducidad, en que invocó la regla del artículo 168 del Código del Trabajo, sin considerar lo dispuesto en los incisos primero y segundo de su artículo 510; y que el tribunal acogió la referida excepción en la audiencia preparatoria. Agrega que el mencionado artículo 168 prevé la suspensión del plazo con la interposición del reclamo o denuncia administrativa ante la Inspección del Trabajo y que su inciso final fija un término de noventa días hábiles desde la separación del trabajador, sin que la judicatura haya tomado en cuenta la referida suspensión del plazo, ni lo establecido en el artículo 510 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 2523 y 2524 del Código Civil, adoptando una decisión que priva a su parte del derecho a accionar y a discutir el fondo del asunto.

Solicita se acoja el recurso, y, por consiguiente, se deje sin efecto la resolución impugnada y se dicte en su reemplazo una que revoque la apelada y rechace la excepción opuesta.

**Segundo:** Que, al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalaron que efectivamente dictaron la resolución cuestionada, en virtud de las razones que consigna a las que se remiten.



**Tercero:** Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, denominado “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y su párrafo primero, intitulado de “Las facultades disciplinarias”, contiene el artículo 545 que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

**Cuarto:** Que, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

**Quinto:** Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los miembros de la judicatura recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte, por cuanto la decisión adoptada se ajusta plenamente a las normas que regulan la caducidad del tipo de acción deducida.

En efecto, consta de las alegaciones del recurrente, del informe de los recurridos y de los antecedentes de la causa, que la demanda se interpuso el día 5 de marzo de 2024, en relación al despido de fecha 31 de octubre de 2023, y que la parte dedujo un reclamo ante la Inspección del Trabajo el día 1 de diciembre del mismo año, siendo citado a un comparendo que se celebró el día 18 de ese mes.

Por otra parte, las acciones planteadas en autos son las de despido injustificado, en cuyo mérito se solicitó el respectivo recargo legal y la devolución del monto que el empleador aportó a la cuenta individual de cesantía de la trabajadora, y la de cobro de prestaciones, referida a un saldo de bono por trabajos en terreno; quedando la primera regida por el artículo 168 del Código del Trabajo, que prescribe “El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare”, agregando en su inciso final que “El plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá cuando, dentro de éste, el trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha Inspección. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá recurrirse al tribunal transcurridos noventa días hábiles desde la separación del trabajador”. Sin



que resulte aplicable al caso lo previsto en el artículo 510 del Código del Trabajo, que regula la prescripción de los derechos y acciones que indica, institución diversa de la caducidad, como también se advierte de los razonamientos expresados en las sentencias de esta Corte invocadas por el recurrente, concernientes a situaciones fácticas y jurídicas distintas.

De lo anterior, se dedujo que el plazo debía computarse entre el día siguiente al despido y aquél en que se interpuso la demanda, considerando su suspensión entre los días 1 y 18 de diciembre de 2023, lo que, efectivamente arroja que la parte accionó fuera del plazo establecido en la legislación, como se decidió en el caso.

**Sexto:** Que lo precedentemente razonado resulta suficiente para concluir que el presente arbitrio disciplinario debe ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se declara que **se rechaza** el recurso de queja interpuesto en contra de los miembros de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz, ministra suplente señora Paola Díaz Urtubia y fiscal judicial señora Ana María Hernández Medina.

Acordada con el voto en contra de la **abogada integrante Sra. Rojas**, quien estuvo por acoger el recurso de queja y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución dictada por los miembros de la judicatura recurridos, de fecha dieciséis de mayo del año en curso, que confirmó la sentencia de dieciséis de abril último que declaró la caducidad de la acción de despido injustificado, disponiendo, en su lugar, que fue interpuesta dentro del término legal, ordenándose que el tribunal *a quo* debe dar curso a la demanda y a la prosecución del procedimiento por el juez no inhabilitado que corresponda, teniendo para ello presente las siguientes argumentaciones:

1) Que la acción de despido injustificado se encuentra regulada en el Título V del Libro I del Código del Trabajo, y que respecto del término para plantearla el artículo 168 señala en su último inciso, que *“el plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá cuando, dentro de éste, el trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha Inspección. No obstante, lo anterior, en ningún caso podrá recurrirse al tribunal transcurridos noventa días hábiles desde la separación del trabajador”*

2) Que para determinar el correcto alcance de dicha normativa, es menester recordar que, en materia laboral, las normas procesales deben ser comprendidas integrando de manera concreta los principios inspiradores que justifican la existencia de tal disciplina, presidida, especialmente, por el principio tuitivo o



protector, y que uno de los basamentos más sensibles en este ámbito, se vincula con el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos, en cuanto consecuencia evidente del reconocimiento constitucional de lo que la doctrina y el derecho convencional y comparado denomina como derecho a la tutela judicial efectiva, de especial relevancia en el contexto de la protección del derecho de los trabajadores.

Tal concepto se alza como fundamento esencial de todo Estado de Derecho, garantizado expresamente por nuestra Carta Fundamental en el numeral 3° de su artículo 19, que reconoce la prerrogativa universal de igual protección de la ley, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, y el derecho a un justo y racional procedimiento, garantía que, además, encuentra como contrapartida orgánica los principios rectores de la actividad jurisdiccional consagrados en el artículo 76 del texto constitucional, específicamente el de inexcusabilidad, que impone a los jueces el deber imperativo de otorgar un pronunciamiento de mérito sobre la controversia que legalmente se le plantee, sin poder excusarse de hacerlo.

3) Que, de este modo, toda interpretación que limite de alguna manera el acceso a la posibilidad de obtención de un pronunciamiento judicial que adjudique un derecho dubitado, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el N° 26° del artículo 19 de la Carta Fundamental, máxime en un contexto de excepcional sensibilidad e importancia como el del derecho del trabajo, que se vincula con la esencia misma del ejercicio de la jurisdicción, en cuanto función tutelar de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento, que, dado su rol protector, debe en lo posible evitar salidas incidentales que impidan un pronunciamiento de mérito.

4) Que, de esta manera, una interpretación armónica de los preceptos y elementos mencionados, como asimismo, del principio *in dubio pro operario*, permite concluir que el artículo 168 ya citado contiene una regla especial, mediante la cual el plazo para deducir las acciones a que se refiere, como también la de tutela laboral por infracción de derechos fundamentales, se sujeta a la posibilidad de suspensión de su cómputo, en la medida que intervenga reclamo administrativo, lo que provoca, en los hechos, la extensión de dicho término, sin poder sobrepasar los noventa días hábiles.

5) Que lo anterior se ve reforzado con el propio tenor literal de la disposición, toda vez que al finalizar el inciso final del mencionado artículo 168 del Código del Trabajo, ocupa la expresión “No obstante lo anterior,...”, denotativo de oposición o diferencia, que se traduce que si se reclama administrativamente, el



señalado plazo se extiende hasta los noventa días hábiles contados desde el término de la relación laboral.

Regístrese, comuníquese y archívense.

Rol N° 17.748-24.-



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Gloria Chevesich R., Andrea Maria Muñoz S., Ministro Suplente Jorge Luis Zepeda A. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Irene Eugenia Rojas M. Santiago, ocho de agosto de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a ocho de agosto de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

